

## LA VALIDEZ DEL DERECHO INDÍGENA EN EL DERECHO NACIONAL

Jorge Alberto GONZÁLEZ GALVÁN\*

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *El Estado pluricultural de derecho*. III. *Los derechos de los pueblos indígenas*. IV. *Conclusión*. V. *Bibliografía*.

### I. INTRODUCCIÓN

El primer intento de validación o de reconocimiento amplio del derecho indígena en el derecho nacional se materializa en la iniciativa de reformas a la Constitución federal elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). El dictamen de dicha iniciativa fue aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, el 25 y 28 de abril de 2001, respectivamente.<sup>1</sup> Dicho dictamen ha sido aprobado ya por la mayoría de las legislaturas locales.<sup>2</sup>

\* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, [jagg@servidor.unam.mx](mailto:jagg@servidor.unam.mx).

1 La Iniciativa fue elaborada el 29 de noviembre de 1996, con base en los acuerdos firmados en San Andrés Larráinzar, Chiapas, por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 16 de febrero de 1996, y enviada por el presidente Vicente Fox al Senado el 5 de diciembre de 2000. Fuente: *Foros para la Revisión Integral de la Constitución*, México, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 2001, pp. 23-26.

2 Soriano, Arturo *et al.*, “Aprueba la mayoría de entidades ley indígena”, *El Universal*, México, 13 de julio de 2001, p. A-8. En este trabajo voy a utilizar las palabras *iniciativa* y *dictamen* para identificar ambos documentos.

Por *derecho indígena* puede entenderse el conjunto de normas que el Estado establece en relación con los derechos de los pueblos indígenas y el conjunto de normas internas de éstos. La iniciativa se refiere al primer ámbito, donde se hace el reconocimiento al segundo, es decir, el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, llamados “usos y costumbres”. El dictamen aprobado integró las reformas, básicamente, en el artículo 2o., que contiene seis párrafos iniciales y dos apartados. En esta ponencia abordaré los puntos relacionados con el reconocimiento del Estado pluricultural de derecho y los derechos reconocidos a los pueblos indígenas.<sup>3</sup>

## II. EL ESTADO PLURICULTURAL DE DERECHO

El titular de la soberanía del Estado es el pueblo (artículo 39 constitucional).<sup>4</sup> Cuando el poder republicano se consolida adopta las características del poder monárquico: *único e indivisible*, es decir, absolutista.<sup>5</sup> Ello originó en los hechos que el pueblo, como titular ahora de la soberanía del Estado republicano, se considerará también único e indivisible, es decir, homogéneo culturalmente. Tal homogeneidad fue dictada e impuesta por la parte de la población que detentaba la hegemonía política. De esta manera, el *pueblo franco* o francés (culturalmente hablando), se consolidó negando los derechos culturales de los pueblos bretón y corzo, por ejemplo. En México, el poder republicano consolida

3 El dictamen consultado fue tomado de la página del Senado en Internet, [www.senado.gob.mx](http://www.senado.gob.mx). Éste, por cierto, no contiene la exposición de motivos correspondiente (consulta del 1o. de mayo de 2001). La *minuta* de la Cámara de Diputados me fue proporcionada por la Dirección de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista.

4 *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* comentada, primera reimpression de la 9a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, t. I, p. 39.

5 Nora, Pierre, “Republique”, *Dictionnaire critique de la révolution française*, sous la direction de François Furet et Mona Ozuf, París, Flammarion, 1988, p. 836.

su pueblo (el que habla español y vive bajo los valores de las sociedades occidentales) negando los derechos culturales de los pueblos *rarámuri*, *wirrárika*, *nayerij*, *tojolabal*... Para la población de las nacientes repúblicas liberales que no correspondían con las características culturales de la parte que detentaba el poder político, el Estado republicano siguió siendo como el Estado monárquico, un Estado absolutista, es decir, etnocida, monocultural, colonialista.

La reforma constitucional de 1992 vino a establecer las bases para la conformación de un Estado republicano, ya no etnocida ni monocultural, sino respetuoso de la heterogeneidad de su población, cuando reconoció que las características culturales del titular de su soberanía eran diversas: “La nación mexicana tiene una composición *pluricultural* sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”.<sup>6</sup> Esto lo confirman la iniciativa y el dictamen (artículos 4o. y 2o., respectivamente).<sup>7</sup> La nación mexicana, el pueblo mexicano, la sociedad mexicana, la población existente en el territorio nacional, con base en este reconocimiento, es culturalmente heterogénea. Dicho reconocimiento jurídico no refleja sino lo que ha sido una constante sociológica: la existencia de culturas diferentes en nuestra historia.<sup>8</sup> De esta manera, el Estado mexicano, entendido como la sociedad mexicana políticamente organizada, es pluricultural. Por ello, las demandas de los pueblos indígenas, puesto que se plantean al interior del Estado nacional, no pretenden provocar la desunión de toda la población ni la separación del territorio del país, sino que se entienda, al incluir el respeto a las diferencias culturales, que la noción de

6 *Diario Oficial de la Federación*, del 28 de enero de 1992.

7 *Foros*..., p. 4.

8 El dictamen abre la posibilidad para que los derechos culturales que se reconocen a los pueblos indígenas, sean reconocidos a otras culturas existentes en el país, como pueden ser los menonitas y las colonias de extranjeros radicados permanentemente en el país: “Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y sus pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllas tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley (artículo 2o., apartado B, fracción IX, párrafo tercero).”

*unicidad e indivisibilidad* del poder político republicano no puede seguir excluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Esta aclaración no tendría lugar si el dictamen no hubiera agregado que: “La nación mexicana es única e indivisible”.<sup>9</sup> Algo que resulta innecesario y que no mejora la iniciativa. Demuestra una falta de sensibilidad histórica y política, como reflejo todavía de una mentalidad colonial: excluyente, intolerante, racista. La misma exposición de motivos de la Iniciativa ya lo aclaraba: “La nación mexicana tiene una composición pluricultural, pero un solo Estado nacional soberano: el Estado mexicano”.<sup>10</sup> Sin embargo, en la exposición de motivos del dictamen se reflejan todavía las posturas *tutelar* del colonialismo español y *paternalista* del colonialismo mexicano. El Estado español trató a los indios como *menores de edad*, y el Estado mexicano los ha tratado como *incapaces*, por eso ambos pretendieron “protegerlos” al *concederles* prerrogativas jurídicas. Estas posturas etnocéntricas consideran a los pueblos originarios como *objetos* y deciden por ellos cuáles han de ser sus derechos, por tanto, dichos pueblos no son *reconocidos como sujetos*, como actores de su propio destino, como arquitectos de sus propios derechos.

El reconocimiento de derechos colectivos en nuestra Constitución, por otra parte, no es una novedad. De hecho, se considera que fue la primera en reconocerlos cuando en 1917 se aprobaron los artículos 27 (los derechos de los campesinos) y 123 (los derechos de los trabajadores). Este original reconocimiento inauguró un proceso de construcción del Estado *social* de derecho. Con ello, el principio de igualdad jurídica se actualizó al reconocerse que la ley no podía ser igual ante aquellos que eran socialmente y económicamente desiguales. Así, vino a establecerse la obligación de las autoridades, laboral y agraria, para suplir la deficiencia de las quejas de trabajadores y campesinos cuando éstas

9 Artículo 2o., párrafo primero.

10 *Foros...*, p. 24.

no mencionaran a lo que tenían derecho con base en los hechos expuestos en las demandas.<sup>11</sup>

La iniciativa y el dictamen confirman, pues, que la nación mexicana es pluricultural, por tanto que el titular de la soberanía del Estado es culturalmente heterogéneo. Con ello se consolidan las bases constitucionales para el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ampliándose el ámbito de protección del principio de igualdad jurídica no sólo a los que son, en lo social y en lo económico diferentes, sino también en lo cultural. Ésta es la razón para hablar ahora de la inauguración de un proceso de construcción novedoso del Estado mexicano, del Estado *pluricultural* de derecho.

¿Cuáles son dichos derechos colectivos?

### III. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Los derechos colectivos de los pueblos originarios son derechos históricos, es decir, imprescriptibles, no se extinguen por el paso del tiempo ni la subordinación política a la que puedan estar sometidos. Los pueblos indígenas de México han vivido bajo el dominio de otros pueblos y fueron éstos los que decidieron cuáles debían ser sus derechos. La iniciativa ha roto esta cadena (literalmente) puesto que ha sido el producto de la negociación, principalmente, entre los pueblos indígenas catalizados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (sobre todo la de los pueblos indígenas organizados) y el Estado mexicano (los ejecutivos y congresos federales y chiapanecos a través, principalmente, del comisionado para la paz y de la COCOPA, respectiva-

11 Reforma constitucional al artículo 107, fracción II, publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, del 7 de abril de 1986; reforma a la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 685-1010 (*Diario Oficial de la Federación*, del 4 de enero de 1980), y al Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, del 16 de enero de 1981, y reforma a la Ley de Amparo, artículos 76 y 79, del 20 de mayo de 1986, en [www.juridicas.unam.mx](http://www.juridicas.unam.mx), consulta del 20 de mayo de 2001.

mente). Este diálogo intercultural ha producido los siguientes contenidos en relación con los titulares de los derechos y el derecho a la libre determinación.

### 1. *Los titulares de los derechos*

La iniciativa retoma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo la definición de pueblos indígenas<sup>12</sup> como titulares de los derechos: “aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (artículo 4o., párrafo primero).”

El dictamen quitó la aclaración respecto de que se consideran pueblos indígenas los que vivían también “antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos”. Algo que tampoco mejora la iniciativa, ya que denota más bien el espíritu colonial todavía latente. Lo que sí la mejora es haber incorporado, para identificar a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, el criterio de autoidentidad: “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas (artículo 2o., párrafo tercero)”<sup>13</sup>.

El dictamen también mejora la iniciativa cuando define (ya que ésta no lo hacía) lo que debe entenderse por comunidades indígenas: “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres (artículo 2o., párrafo cuar-

<sup>12</sup> Artículo 1o., sección 1, inciso b, *Foros...*, p. 80. Dicho Convenio ha sido ratificado por México (*Diario Oficial de la Federación*, del 24 de enero de 1991).

<sup>13</sup> Criterio que consta en el Convenio 169: artículo 1o., sección 2, *Foros...*, pp. 80 y 81.

to)".<sup>14</sup> Supongo que se ha retomado la expresión “usos y costumbres” ya que se refieren, en este contexto, al aspecto electoral (como ya es común en Oaxaca). Sin embargo, considero que la iniciativa reconoce a los *sistemas normativos* de los pueblos indígenas, con lo cual incluye a sus normas electorales. La expresión “usos y costumbres” es una reminiscencia colonial, que fue utilizada por primera vez en el siglo XVI en una Cédula Real para condicionar la aplicación de los sistemas normativos de los indígenas si se oponían a la ley castellana o a la moral cristiana.<sup>15</sup>

Además de las definiciones y del criterio de autoidentidad señalados para identificar a los sujetos de los derechos, el dictamen establece que deberán tomarse en cuenta los “criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico” (artículo 2o., párrafo quinto). Algo que me parece redundante y que complica la interpretación ya que habla de “reconocimiento” y no de identificación, y menciona que lo harán las legislaturas de los estados, antes de la frase que reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Lo cual hace pensar que el “reconocimiento” se refiere a este derecho y no a su identificación.

## 2. *El derecho a la libre determinación*

El derecho a la libre determinación es la matriz de prerrogativas reconocidas a los pueblos indígenas. La libre determinación es a los pueblos lo que la libertad es a los individuos: su razón de ser y estar sobre la tierra. En otras palabras, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es la facultad de decidir libremente su desarrollo social, económico, político, cultural y espiritual. Este derecho se les reconoce a los pueblos in-

14 Algo que ya constaba en la Constitución de Oaxaca: artículo 16, párrafo segundo (*Peródico Oficial* del 29 de octubre de 1990), en Instituto Nacional Indigenista (ed.), *Los pueblos indígenas en la legislación nacional. Recopilación de disposiciones específicas en materia indígena*, 2a. ed., México, INI, agosto de 2001, p. 19.

15 García Gallo, Alfonso, *Manual de historia del derecho español*, vol. 2, 4a. ed., Madrid, Artes Gráficas y Ediciones, 1971, p. 234.

dígenas para ser ejercido al interior del poder político nacional, es decir, respetando su legislación y reconocidas como autoridades. Respetando su legislación cuando se establece en la iniciativa que: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía *como parte del Estado mexicano* (artículo 4o., párrafo segundo)”. Y reconocidas como autoridades cuando propone reformar el artículo 115 para establecer que son *entidades de derecho público* (fracción IX, párrafo segundo).

En el dictamen se reconoce el derecho a la libre determinación y confirma que los pueblos indígenas respetarán la legislación vigente al establecer que dicho derecho “se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional” (artículo 2o., párrafo quinto). Sin embargo, no reconoce a las comunidades indígenas como autoridades del Estado mexicano, es decir, como entidades de derecho público, sino como “entidades de interés público” (apartado A, fracción VIII, segundo párrafo), es decir, como órganos subordinados, tutelados, por el Estado. El contexto del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución es como *personas jurídicas*, como sujetos de derechos colectivos, donde el derecho nacional reconoce válida la existencia de sus autoridades y normas internas como parte del mismo, por ello se habla de entidades de derecho público. La noción de interés público hace referencia no a las personas (jurídicas o físicas) sino a la finalidad de las *normas* que emite el Estado: son normas de derecho público cuando el fin que se persigue es de beneficio colectivo, de interés público, y son normas de derecho privado cuando el fin es satisfacer un interés particular.<sup>16</sup> El Estado puede reconocer organizaciones de individuos como *empresas e instituciones de interés público* cuando los fi-

16 Fraga, Gabino, *Derecho administrativo*, 33a. ed., revisada y actualizada por Manuel Fraga, México, Porrúa, 1994, pp. 81-88; Gaxiola, Moraila, Federico Jorge, “Derecho privado y derecho público”, *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, t. III-D, pp. 197-199.



nes que persiguen son de beneficio colectivo, pero no son consideradas como autoridades del Estado.<sup>17</sup>

Uno de los derechos que se decantan del derecho a la libre determinación es el derecho de los pueblos indígenas a concebir, aprobar y aplicar sus sistemas normativos internos.

### *El derecho al derecho*

El derecho indígena, entendido como el derecho de los pueblos indígenas a concebir y aplicar sus normas internas está validado por el derecho nacional cuando se establece que en “la aplicación de sus sistemas normativos...”.<sup>18</sup> En esta frase se está reconociendo que en los pueblos indígenas existen normas concebidas y aprobadas por ellos mismos, y que en su aplicación, o sea, en su derecho a la *juris dictio* (su derecho a decir el derecho), es válido también siempre y cuando se respeten los derechos humanos. La iniciativa y el dictamen mencionan en especial los de las mujeres, pero entiendo que por *derechos humanos* se incluyen los derechos de las mujeres y a todas las garantías sociales e individuales vigentes.

La iniciativa establece que los juicios, procedimientos y decisiones de las autoridades judiciales indígenas serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado. El dictamen sustituye “convalidados” por *validados (idem.)*. Considero que al reconocer a los pueblos indígenas como entes de derecho público, como parte del Estado mexicano, sus juicios, procedimientos y resoluciones están sujetos a respetar la legislación vigente y por tanto a someterlos, como los de cualquier autoridad, no a la convalidación, validación u homologación de otra autoridad, sino a su *revisión* por un órgano jurisdiccional del Estado cuyo personal,

17 Serra Rojas, Andrés, *Derecho administrativo. Doctrina, legislación y jurisprudencia*, 17a. ed., corregida y aumentada por Andrés Serra Rojas Beltri, México, Porrúa, 1996, pp. 891-901.

18 Artículo 4o., fracción II de la iniciativa y artículo 2o., apartado A, fracción II del dictamen.

en este caso, tenga “conocimiento de sus lenguas y culturas” (como ya se establece para la designación de intérpretes y traductores)<sup>19</sup> a solicitud de la parte afectada. Tenemos ya en México un antecedente de esto: la *Ley de Justicia Indígena* de Quintana Roo reconoce la existencia de dicho órgano revisor (o de apelación) perteneciente al Supremo Tribunal de Justicia del estado, cuyos magistrados deberán ser “miembros respetables de la comunidad, que dominen el idioma, y conozcan los usos, las costumbres y tradiciones de su comunidad, sin que sea necesario reunir los requisitos o tengan los impedimentos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado (artículo 9o., párrafo segundo)”.<sup>20</sup> El reconocimiento y ejercicio de la autoridad judicial indígena debe ser plena. Así se establece también en Quintana Roo: “Si las partes, por la mediación del juez tradicional admiten arreglar sus diferencias mediante convenio, éste quedará homologado a una sentencia debidamente ejecutoriada, y si deciden someterse al arbitraje del juez tradicional, la resolución dictada tendrá el carácter de cosa juzgada (artículo 12)”.<sup>21</sup>

Éste es el espíritu del acuerdo establecido respecto al *nuevo marco jurídico* que el gobierno federal se ha obligado a reconocer en la Constitución: “Derechos de jurisdicción. Para que se acepten sus propios procedimientos para designar sus autoridades y sus sistemas normativos para la resolución de conflictos internos, con respeto a los derechos humanos (Acuerdos de San Andrés)”.<sup>22</sup>

La ley reglamentaria correspondiente tendrá que establecer los ámbitos de competencia de cada jurisdicción, para que de manera coordinada se apliquen las normas y los delitos no queden impunes sea cual sea el lugar en que se cometan. Dicha ley apo-

19 Artículo 4o., fracción VII, párrafo quinto de la iniciativa y artículo 2o., apartado A, fracción VIII, párrafo primero del dictamen.

20 Fuente: *Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo*, Chetumal, INI, Delegación Estatal, Procuración de Justicia, sin fecha.

21 *Idem*.

22 *Foros...*, p. 9.

varía igualmente los contenidos por hacerse en las legislaciones locales, tal como está previsto, en forma general, en los Acuerdos de San Andrés:

Competencia. Se necesita configurar una atribución concurrente con las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, así como una distribución de competencias políticas, de manejo de recursos y protección de la naturaleza entre estas instancias políticas de gobierno del Estado mexicano, a efecto de responder de manera oportuna a los requerimientos y demandas de los pueblos indígenas.<sup>23</sup>

Los aspectos de coordinación jurisdiccional tendrían que establecerse en una ley federal y no en una ley local (como lo pretende el dictamen, según lo explica su exposición de motivos). En todo caso, la elaboración de una ley reglamentaria en materia indígena facilitaría el desglose de los contenidos por la legislación local.

Otro aspecto que se habrá de considerar es que el ámbito espacial de validez de las normas indígenas y estatales no está plenamente reconocido en el dictamen. Al menos en la iniciativa se mencionaba la posibilidad de formar municipios indígenas.<sup>24</sup> Sin embargo, en el dictamen esto desaparece. Resulta incongruente que si se están reconociendo autoridades y sistemas normativos indígenas, no se establezca el ámbito territorial sobre el cual ejercerán sus funciones y aplicarán las normas.

23 *Ibidem*, p. 12.

24 “Las Legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estaban asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas (artículo 115, fracción X, párrafo segundo)”.

#### IV. CONCLUSIÓN

Desde una perspectiva histórica son innegables los avances logrados sobre el reconocimiento o validez del derecho indígena en el derecho nacional en los años recientes: ante los rezagos académicos se ha generado una lluvia de reflexiones multidisciplinarias que enriquece el proceso; ante rezagos jurídicos tenemos 16 Constituciones locales y la federal que reconocen la existencia de pueblos indígenas; ante los rezagos políticos se ejerce el derecho a la autonomía en Oaxaca; ante los rezagos judiciales se ejerce el derecho a la jurisdicción en Quintana Roo. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que no. La mayor parte de dichos reconocimientos, por un lado, se iniciaron en un contexto poco propicio a la participación directa y plural de los pueblos indígenas y han sido esfuerzos institucionales coyunturales carentes de voluntad política para aplicar, y ampliar, cabalmente las reformas. Por otro lado, los alcances, en general, han sido limitados ya que los órganos públicos encargados de aplicar tales reformas (sean instituciones administrativas o judiciales) no han tenido la capacidad financiera suficiente ni su personal ha sido actualizado para actuar con base en la letra y espíritu de esos cambios.

La constante hasta ahora es que el reconocimiento del derecho indígena por el Estado se ha encontrado sujeto a los vaivenes político-electorales, y hasta emocionales, de los ejecutivos locales y federal, así como de sus legisladores, es decir, de la población no indígena que ha ejercido, históricamente, el monopolio de la producción de normas. Si se quiere intentar corregir esta tendencia se tendría que ir incorporando personal a las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales del Estado, con conocimientos de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas. Parte de este proceso podría considerar la posibilidad de convocar a nuevos congresos constituyentes para darnos Constituciones (federal y locales), con representantes de los pueblos indígenas, que respondan a la demanda de respeto a las diferencias culturales para que las relaciones sociales sean igualitarias, y respondan a la deman-

da de solidaridad social para que las condiciones de vida de la mayor parte de la población de este país sean dignas.

## V. BIBLIOGRAFÍA

ANAYA MUÑOZ, Alejandro, “Gobierno de las mayorías y pueblos indígenas”, *La Jornada*, México, 9 de mayo de 2001.

BECERRIL, Andrea, “Académicos piden a la Cocopa elaborar una nueva propuesta. Le demandan adoptar una actitud firme y valiente”, *La Jornada*, México, 17 de julio de 2001.

CALDERÓN HINOJOSA, Felipe, “La reforma en materia indígena”, *Reforma*, México, 4 de mayo de 2001.

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, *Llamamiento indígena*, 7 de mayo de 2001, [www.laneta.apc.org](http://www.laneta.apc.org).

CRESPO, José Antonio, “El espíritu de la ley indígena”, *Bucareli* 8 (suplemento de *El Universal*), México, 21 de mayo de 2001.

ENCISO L., Angélica, “Escuchar todas las voces, solicitan al Congreso. Aún es tiempo de rectificar, coinciden Marcos Matías y Xóchitl Gálvez”, *La Jornada*, México, 17 de julio de 2001.

GARDUÑO, Roberto, y Pérez, Ciro, “Controversia constitucional del PRD contra el Congreso de la Unión y ocho legislaturas locales. Acudirá a la Suprema Corte de Justicia; el proyecto ‘nació muerto’, advierte”, *La Jornada*, México, 17 de julio de 2001.

GILLY, Adolfo, “PRD: ley indígena y alianzas necesarias”, *La Jornada*, México, 4 de mayo de 2001.

GÓMEZ, Magdalena, “Entre la autonomía de los pueblos indígenas y la tutela del Estado”, *La Jornada*, México, 12 de mayo de 2001.

GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, “Imperó la mentalidad colonialista y tutelar en la ley indígena”, entrevista de Sofía Miseslem, *Excelsior*, México, 21 de mayo de 2001.

- GONZÁLEZ GARCÍA, Carlos, “Nueva agresión contra la comunidad indígena”, *Ojarasca* (suplemento de *La Jornada*), México, núm. 49, mayo de 2001.
- JORNADA, LA (ed.), “Modificaciones del Senado a la ley Cocopa”, *Perfil de la Jornada*, México, 28 de abril de 2001.
- LEÓN PORTILLA, Miguel, “Reforma indígena: diálogo y coherencia”, *La Jornada*, México, 9 de mayo de 2001.
- MEYER, Lorenzo, “¡No legislarás en vano!”, *Reforma*, México, 4 de mayo de 2001.
- MURAT, José, “Ley indígena racista y retrógrada”, *El Universal*, México, 9 de mayo de 2001.
- RODRÍGUEZ LASCANO, Sergio, “Un paso adelante, dos pasos atrás”, *La Jornada*, México, 2 de mayo de 2001.
- VILLORO, Luis, “Dos ideas del Estado-nación”, *La Jornada*, México, 9 de mayo de 2001.